



Facultad de Derecho
Universidad Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

Análisis del Jurado popular en España. Juicios paralelos y tipos de Jurado en Europa



Autora: Marta Durán De Toro.

Directora: María José González Ordovás.

2018 – 2019.



~ ÍNDICE ~

ABREVIATURAS	3
<u>I. INTRODUCCIÓN</u>	4
<u>II. CONCEPTO, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL JURADO EN ESPAÑA</u>	6
1. CONCEPTO	6
2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN	7
2.1. Origen del Jurado en el estatuto de Bayona	7
2.2. El Jurado a partir de la constitución de Cádiz de 1812	8
2.2.1. Discurso Preliminar de la Comisión de proyecto de ley	8
2.2.2. Constitución de Cádiz de 1812	8
2.2.3. Decreto de 22 de octubre, reglamento sobre libertad de imprenta	9
2.3. El Jurado en la constitución de 1837	9
2.4. El Jurado en la constitución de 1869 y la ley del jurado de 1888	10
2.5. El Jurado desde la constitución de 1931	10
3. EL JURADO A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978	11
4. EL JURADO ACTUAL EN ESPAÑA	12
4.1. Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado	12
<u>III. REFLEXIONES SOBRE CIERTOS ASPECTOS DEL JURADO POPULAR ...</u>	13
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DEL JURADO	13
1.1. Competencia atribuida expresamente al Tribunal del Jurado	13
1.2. Competencia en materia de delitos conexos	15
2. QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DEL JURADO POPULAR	17

2.1. Recusación de los candidatos a Jurado	19
3. LA MOTIVACIÓN DEL VEREDICTO DEL JURADO POPULAR	20
4. RECURSO DE APELACIÓN	23
<u>IV. JURADO POPULAR Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA</u>	26
1. CONFLICTO ENTRE EL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN (ART 18.1 CE) Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN (ART 20.1 CE)	26
1.1. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (ART 18.1 CE)	26
1.2. Derecho a la libertad de información (ART 20.1 CE)	26
2. LOS JUICIOS PARALELOS Y LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL TRIBUNAL DEL JURADO	27
2.1. El derecho a la presunción de inocencia (ART 24.2 CE)	27
2.2. Los juicios paralelos	29
<u>V. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TIPOS DE JURADOS EN EUROPA</u>	32
1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE JURADOS EN RELACIÓN CON LA INFLUENCIA QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRODUCEN SOBRE ELLOS	32
1.1. Sistema puro o anglosajón	32
1.2. Jurado mixto	33
1.3. Jurado escabinado	34
<u>VI. CONCLUSIONES</u>	36
BIBLIOGRAFÍA	39

~ ABREBIATURAS ~

Art.	Artículo
AP.	Audiencia Provincial
BOE.	Boletín Oficial del Estado
CE.	Constitución Española de 1978
EE. UU.	Estados Unidos
Ej.	Ejemplo
LECRIM.	Ley de Enjuiciamiento Criminal
LO.	Ley Orgánica
LOPJ.	Ley Orgánica del Poder Judicial
LOTJ.	Ley Orgánica del Tribunal del Jurado
MF.	Ministerio Fiscal
NUM.	Número
P.	Página
Ss.	Siguientes
STC.	Sentencia Tribunal Constitucional
TC.	Tribunal Constitucional
TJ.	Tribunal del Jurado
TS.	Tribunal Supremo
TSJ.	Tribunal Superior de Justicia

I. INTRODUCCIÓN

La cuestión de estudio abordada en este trabajo es el Tribunal del Jurado popular. Se comienza haciendo un breve repaso de su historia en España hasta llegar a la legislación actual en la que se regula, matizando las cuestiones más problemáticas del Tribunal e incidiendo en los problemas que presenta dicha figura en relación con la influencia de los juicios mediáticos. Finalmente se aportan unas pinceladas sobre los diferentes tipos de Jurado popular que existen actualmente en Europa, con la finalidad de encontrar los puntos más ventajosos de cada tipo de Jurado, principalmente en relación con la influencia que los medios de comunicación ejercen sobre ellos.

A pesar de que, en un primer momento, pudiera parecer que es una figura muy bien asentada puesto que han pasado más de veinte años desde la ley 5/1995 del Tribunal del Jurado, la discusión continúa, se toman posiciones muy diferentes, hay quienes querrían ponerle fin, quienes le dotarían de mayores competencias, y quienes lo someterían a un mayor control. El Tribunal del Jurado es un tema que ha sido objeto de debate constante, y continúa siéndolo en la actualidad. Se trata de un asunto controvertido de gran interés social, tanto para aquellos que se dedican al mundo del derecho como para aquellos que no, ya que se ven “obligados” a participar directamente en él a través de esta figura.

Desde el arte: literatura y cine, hasta la realidad es un tema que está muy presente, por ello, siempre me había despertado curiosidad. La curiosidad fue a más cuando presencié los primeros juicios por Jurado en la Audiencia Provincial de Zaragoza, desde ese momento me llamaron la atención numerosos aspectos del funcionamiento de esta figura, a la par que su importancia, las reacciones tan dispares que genera en los distintos juristas y en la sociedad, y, sobre todo la facilidad con la que se puede ver influida por los medios de comunicación.

Respecto a la metodología seguida en el desarrollo del trabajo, consiste, en primer lugar, en la realización de un estudio sobre los aspectos más controvertidos de la ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. Además, se hace alusión a sentencias de nuestros tribunales, que ayudan a llegar más allá de lo que establece la ley, aproximan la teoría a la aplicación práctica en España.

Se hace un primer acercamiento al concepto de “Jurado popular” y su origen en nuestro país. A continuación, se reflexiona sobre los aspectos de la legislación que suscitan mayor interés en la práctica, en el día a día de los juicios con Tribunal del Jurado, y los cuales precisan de aclaraciones para entender como funciona realmente. Una vez desarrollada la regulación, es necesario hacer especial mención a la importancia de los medios de comunicación y los juicios paralelos, ya que, influyen en cierto modo en la perspectiva con la que los miembros de esta figura se enfrentan al proceso. En relación con los medios de comunicación, se abordan los derechos fundamentales que entran en juego. Y finalmente, se lleva a cabo un análisis comparativo de la situación en otros países de Europa.

II. CONCEPTO, ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL JURADO EN ESPAÑA

1. CONCEPTO

El Tribunal del Jurado o Jurado popular, recibe cualquiera de estas denominaciones indistintamente, es una institución que representa la intervención popular en la administración de justicia.

Manuel Ossorio y Florit, abogado y reputado jurista español, determina que «el Jurado Popular es un tribunal constituido por ciudadanos llamados por la ley a juzgar la culpabilidad o inocencia de un imputado, según su propia apreciación de los hechos»¹.

Por su parte la RAE define el término Jurado como «Institución a través de la cual ciudadanos legos en derecho participan en la Administración de justicia mediante la emisión, tras la celebración de un juicio oral, de un veredicto proclamando la culpabilidad o inculpabilidad del acusado. Junto con un magistrado de la Audiencia Provincial que lo presidirá, conforman el Tribunal del Jurado»².

Esta definición adelanta algunos de los conceptos sobre los cuales se profundizará más adelante, como es el caso del veredicto del Jurado.

En definitiva, en una primera aproximación, sin entrar en las características propias del Jurado establecidas en la ley 5/1995, de 22 de mayo, se puede decir que el Tribunal del Jurado en España es una institución en la que ciudadanos no conocedores del derecho participan directamente en la administración de justicia, juzgando la culpabilidad o no culpabilidad de un acusado.

Hay que matizar que no cualquier ciudadano sin titulación en derecho puede participar en esta institución, y tampoco podrán entrar a juzgar a los acusados de cualquier tipo de delito, posteriormente se verán cuáles son los requisitos para poder ejercer como Jurado popular y los delitos en los que entra en juego dicha figura.

¹ OSSORIO, M., *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*, Heliasta, Buenos Aires, 1974, p. 528.

² MACHADO, S. M., *Diccionario del español jurídico*, Barcelona, Ed Espasa, 2016.

2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN

Actualmente se cuenta con la ley 5/1995 del Tribunal del Jurado, pero no es este el primer momento en el que se regula acerca de esta institución. Su primera aparición en un texto legal se remonta al siglo XIX, en el Estatuto de Bayona.

En la exposición de motivos de la ley 5/1995 del Tribunal del Jurado se citan las constituciones españolas en las que dicha figura adquiere importancia, textualmente se establece «cada periodo de libertad ha significado la consagración del Jurado; así en la Constitución de Cádiz de 1812, y en las de 1837, 1869 y 1931, y por el contrario cada época de retroceso de las libertades públicas ha eliminado o restringido considerablemente ese instrumento de participación ciudadana, en paralelo y como complemento a las restricciones del conjunto de sus derechos y de los instrumentos de participación en los asuntos públicos»³.

A continuación, se explica la concreta regulación del Jurado en las mencionadas constituciones.

2.1. Origen del Jurado en el estatuto de Bayona

El estatuto de Bayona es redactado por Napoleón, y data del 06 de julio de 1808, se dividió en trece títulos, es en el antepenúltimo título: Título XI Del orden judicial, donde se hace mención del Jurado popular, concretamente en su artículo 106⁴.

Se trata de una simple mención, ya que en la práctica dicho artículo no tuvo ninguna relevancia, pero requiere de especial atención, porque normativamente es en este momento cuando se plantea por primera vez la posibilidad de establecer un proceso por jurados.

No tuvo gran importancia práctica puesto que el mencionado artículo 106 está inspirado en el artículo 62 de la Constitución Francesa napoleónica, motivo por el cual, entre otros, se rechaza al Estatuto de Bayona como constitución española.

³ Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo de 1995, del Tribunal del Jurado (BOE núm. 122, de 23 de mayo de 1995).

⁴ Art 106 Estatuto de Bayona: «*en las primeras cortes se tratará de si se establecerá o no el proceso por jurados*».

2.2. El Jurado a partir de la constitución de Cádiz de 1812

2.2.1. Discurso Preliminar de la Comisión de proyecto de ley

Siguiendo con lo establecido en el Estatuto de Bayona en su art 106, es en las Cortes de Cádiz de 1810 a 1812 donde se trata el tema de establecer o no el proceso por jurados. Optaron por la segunda idea, y aunque bien consideraban que la institución del Jurado era deseable, también eran conscientes de que en aquel momento la sociedad no estaba preparada para una institución de tal calibre.

El Discurso Preliminar de la Comisión establece textualmente que: «la Comisión no entrará a examinar las razones en que se fundan los que apoyan e impugnan uno y otro sistema. Encargada por V.M de arreglar un proyecto de Constitución para restablecer y mejorar la antigua ley fundamental de la Monarquía, se ha abstenido de introducir una alteración substancial en el modo de administrar la justicia, convencida de que reformas de esta trascendencia han de ser el fruto de la meditación, del examen más prolijo y detenido, único medio de preparar la opinión pública para que reciba sin violencia las grandes innovaciones. Pero al mismo tiempo la Comisión ha creído que la Constitución debía dejar abierta la puerta para que las Cortes sucesivas, aprovechándose de la experiencia y del adelantamiento, que ha de ser consiguiente al progreso de las luces, puedan hacer las mejoras que se estimen oportunas en el importantísimo punto de administrar justicia»⁵.

2.2.2. Constitución de Cádiz de 1812

Esta intención de la comisión se plasmó finalmente en el artículo 307 de la Constitución de Cádiz de 1812 que deja una vez más, en manos de las Cortes venideras, la facultad de hacer lo que consideren más conveniente.

El mencionado artículo establece lo siguiente: «Si con el tiempo creyeren las Cortes que conviene haya distinción entre los jueces del hecho y del derecho, la establecerán en la forma que juzguen conducente».

⁵ “Discurso preliminar leído en las Cortes de Cádiz al presentar ante la Comisión de Constitución, el proyecto de ella”, págs. 60 y 61. Biblioteca Digital Jurídica de la Universidad de Sevilla. <http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/constitucionDe1812Proyecto.pdf>

2.2.3. Decreto de 22 de octubre; reglamento sobre libertad de imprenta

Este decreto les otorga competencia a los jueces de hecho para enjuiciar delitos de abuso de la libertad de imprenta. Según el título VII de dicho reglamento, los “jueces de hecho” debían ser nueve personas de más de 25 años en el ejercicio de sus derechos. Servir el cargo era obligatorio y se renovaba cada año.

Aunque no establece como tal la institución del Jurado, sí introduce, en opinión de María del Carmen Sáenz Berceo (profesora titular de historia del derecho de la Universidad de La Rioja) «un órgano que se puede considerar como de apoyo a la justicia, y que, dado su cometido y composición, se aproximaría en cierto modo al Jurado, se trata de la conocida como Junta de Censura»⁶.

Tal como señala María del Carmen Sáenz Berceo, el Tribunal del Jurado recibe en esta etapa una especial atención de los legisladores; el Código penal de 1822 ocupaba parte de su articulado en tratar el Jurado, y el Proyecto de Código procesal criminal de 1823 reconocía la competencia del Jurado en el conocimiento de los delitos graves, con algunas excepciones, estableciendo un doble Jurado de acusación y de calificación⁷.

2.3. El Jurado en la constitución de 1837

El art 2 de la constitución de 1837 establece de forma expresa «la calificación de los delitos de imprenta corresponde exclusivamente a los jurados».

En este momento se produce un importante avance, se atribuye la competencia en exclusiva de los delitos de imprenta al Jurado, no se le otorgan mayores facultades puesto que los legisladores, pensando en el bien de la sociedad, querían introducir la figura “poco a poco”.

Si bien es cierto, que, en el artículo primero del apartado “Artículos adicionales” se plasma lo siguiente: «Las leyes determinarán la época y el modo, en que se ha de establecer el juicio

⁶ BERCEO, M. D., *Apuntes sobre la institución del jurado en España, el jurado en el siglo XXI*, La Rioja, Universidad de la Rioja, 2006, p. 6.

⁷ *Ibíd*em, p. 7.

por jurados para toda clase de delitos». A través de este artículo adicional, se deja abierta una vez más la posibilidad de que el legislador regule sobre esta materia.

2.4. El Jurado en la constitución de 1869 y la Ley del Jurado de 1888

En esta ocasión es el art. 93, situado en el título VII, del Poder Judicial, el que menciona a la institución del Tribunal del Jurado. Concretamente señala: «Se establecerá el juicio por jurados para todos los delitos políticos, y para los comunes que determine la ley. La ley determinará también las condiciones necesarias para desempeñar el cargo de Jurado».

Se da un paso más allá respecto de las constituciones anteriores, ya que la competencia del Jurado aumenta de los delitos de imprenta, a toda clase de delitos políticos e incluso recoge la posibilidad de que se extienda la competencia a los juicios comunes, siempre por ley.

Es la Ley del Jurado de 1888 la primera en regular de forma directa y precisa la institución del Jurado en España. Lo que resulta de mayor interés es conocer la composición y competencia que se le otorgó: se trata de un Jurado compuesto por doce jurados legos, tres magistrados y dos jueces de hecho suplentes; competente para conocer de todos los delitos de mayor importancia que afecten al orden social cometidos por imprenta o por delitos electorales.

Años más tarde, los reales Decretos de 1907 y 1920, suspendieron el Tribunal del Jurado para ciertos delitos y en Barcelona y Gerona, y ya en 1923 tras el golpe de Estado de Primo de Rivera del 13 de septiembre, se suspendió la Constitución, se disolvieron los Ayuntamientos, se prohibieron los partidos políticos, se declaró el estado de excepción y se suspendió la institución del Jurado en toda España a través de un Real Decreto de 21 de septiembre de este mismo año.

2.5. El Jurado desde la constitución de 1931

Tras la proclamación de la Segunda República española, por medio de la constitución de 1931, se instaura de nuevo el Tribunal del Jurado. Su artículo 103 establecía lo siguiente: «el pueblo participará en la administración de justicia mediante la institución del Jurado, cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial».

Tras el triunfo del frente popular se reorienta la Justicia, en lo que atañe al TJ, el 23 de julio de 1936 un decreto suspende “en toda la Nación... todos los términos judiciales” salvo los procedimientos seguidos ante los Tribunales de Urgencia en aplicación de la Ley de Orden Público. De este modo queda detenida y casi disuelta la justicia ordinaria de la República ⁸.

3. EL JURADO A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978

Tras las diferencias en la regulación del Jurado, que se han mostrado a lo largo de las explicaciones de las constituciones de 1812, 1837, 1869 y 1931; es lo suyo destacar el reconocimiento que la actual constitución, la Constitución Española de 1978, hace a la institución del Jurado.

En su artículo 125, situado en el Título VI “Del Poder Judicial”, establece que «los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los tribunales consuetudinarios y tradicionales».

Es decir, la constitución española reconoce una vez más la posibilidad de los ciudadanos de participar en la Administración de Justicia a través del Jurado popular. Con la diferencia, de que esta vez, no acota el campo de actuación a los delitos de imprenta como hacía la CE 1837, o a los delitos políticos en el caso de la CE 1869; si no que más bien, deja en manos del legislador la determinación de los procesos penales en los cuales actuará el Tribunal del Jurado, al igual que la constitución de la II República española, la CE de 1931.

En resumen, la CE 1978 en su artículo 125 simplemente reconoce la institución del Jurado y señala que su campo de actuación será el de los procesos penales, de tal forma que el Jurado en ningún caso podrá participar como tal en procesos civiles o de la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo que no hace la constitución es determinar los delitos exactos en los que podrá entrar a conocer esta figura, esto último queda en manos del legislador.

El legislador no hace uso de su facultad de redactar una ley del Jurado, hasta 1995, es pues la Ley orgánica 5/1995 de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado la que responde a las

⁸ CRUCES, E. Y AQUESOLO, C., *Los años convulsos 1931 – 1945*, Cádiz, Junta de Andalucía, 2006, p.p. 53-65.

incógnitas que se han ido planteando a lo largo de esta exposición sobre el origen y la evolución de la institución del Jurado en España.

4. EL JURADO ACTUAL EN ESPAÑA

4.1. Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado

Nuestra constitución española data de 1978, sin embargo, no es hasta 1995 cuando se regula la ley del Tribunal del Jurado. Son exactamente 17 años los que se tarda en conseguir regular esta institución. ¿A qué se debe este retraso en su regulación normativa?

En la sinopsis del art 125 CE se intenta dar una respuesta a esta cuestión, se explica que «quizás este retraso sea debido a los problemas de encaje que pudieron surgir en una organización judicial escasamente estructurada en el momento de promulgación de la Constitución española de 1978. A ello hay que añadirle además el recuerdo, que estaba en mente tanto del legislador como de la sociedad, de una complicada experiencia histórica del funcionamiento del juicio por Jurado»⁹.

El primer proceso con Jurado popular en España, una vez dictada la ley de 1995 del Tribunal del Jurado, tuvo lugar en mayo de 1996. Este juicio con Jurado Popular se celebró en Palencia y el veredicto del Jurado, formado por ocho hombres y una mujer, fue “culpable”. Se le declaró al acusado culpable de la muerte de su hermano.¹⁰

En la exposición de motivos de la ya mencionada ley, son varios los asuntos que se exponen, desde el fundamento constitucional de la ley hasta aclaraciones sobre los ciudadanos jurados, el juicio oral o el veredicto.

En dicha exposición de motivos se señala que la participación del ciudadano en los asuntos públicos es un punto clave del Estado democrático; uno de esos asuntos públicos es la Administración de Justicia y es por ello por lo que es necesario dotar a los ciudadanos de cierta participación en dicho ámbito, esto se pretende a través de la institución del Jurado.

A continuación, se aportan algunas reflexiones sobre ciertos aspectos de la Ley del Jurado.

⁹ ALCUBILLA, A. Y GONZÁLEZ, E., (2003), *Sinopsis del Art 125 CE*, El Congreo.

¹⁰ CIA, B. (28 de mayo de 1996), El primer veredicto del Jurado reinstaurado fue condenatorio en un caso de homicidio, *El País*.

III. REFLEXIONES SOBRE CIERTOS ASPECTOS DEL JURADO POPULAR

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL DEL JURADO

1.1. Competencia atribuida expresamente al Tribunal del Jurado

Conocer la competencia propia del Tribunal del Jurado es un tema clave, siempre es importante saber cuáles son las atribuciones de un órgano para conocer su funcionamiento.

La ley 5/1995 se encarga de enumerar las competencias que le corresponden al TJ, el artículo 1 es el que determina dichas competencias, el texto original del art 1.1 lucía así: «El Tribunal del Jurado, como institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia, tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes rúbricas: a) Delitos contra la vida humana. b) Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. c) Delitos contra el honor. d) Delitos de omisión del deber de socorro. e) Delitos contra la intimidad y el domicilio. f) Delitos contra la libertad. g) Delitos contra el medio ambiente».

Lo que ocurre es que la ley de 1995 ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, estas transformaciones han afectado precisamente al texto del artículo 1, en ese mismo año, la Ley Orgánica 8/1995, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, cambia la redacción de la letra “a”, que a partir de entonces se convierte en «delitos contra las personas»; mantiene igual las letras “b” y “c”; engloba las rúbricas de las letras “d” “e” y “f” en una nueva redacción de la letra “d” referida a los «delitos contra la libertad y la seguridad»; y anula la letra “g” sobre delitos contra el medio ambiente, pero a cambio en la letra “e” se establecen los «delitos de incendios».

Actualmente este artículo establece que el Tribunal del Jurado tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos contenidos en las rúbricas siguientes: «a) Delitos contra las personas b) Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos c) Delitos contra el honor d) Delitos contra la libertad y la seguridad».

Por lo tanto, se observa que con el tiempo se ha mantenido intacta la redacción de las letras “b” y “c” referidas a los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus

cargos, y delitos contra el honor, respectivamente. Sin embargo, las actuales letras “a” y “d” son fruto de la modificación que tuvo lugar en noviembre del 1995, y la letra “e” establecida en dicha modificación, es suprimida por la disposición final tercera de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

El apartado dos de este mismo artículo 1, establece que el TJ será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos de homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos, del cohecho, del tráfico de influencias, de la malversación de caudales públicos, de los fraudes y exacciones ilegales, de las negociaciones prohibidas a funcionarios y de la infidelidad en la custodia de presos.

En opinión de Juan Antonio Frago Amada, fiscal perteneciente al grupo de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de La Coruña, está fuera de lugar que el Tribunal del Jurado, formado por legos en derecho, decida sobre delitos complejos como el homicidio o los delitos de corrupción. Además, añade que el delito de allanamiento de morada ha dejado de ser enjuiciado por dicho tribunal, porque nadie quiere montar un Jurado para algo así, y se disfraza en muchos casos de un robo en grado de tentativa¹¹.

Es una opinión muy extendida, ya que son numerables juristas los que consideran que no es coherente que el Tribunal del Jurado enjuicie precisamente los delitos de mayor envergadura como son los de homicidio o asesinato, aunque a simple vista parezca sencillo determinar en base a unas pruebas si alguien es o no culpable, se trata de un proceso muy complejo. Y, además, se trata de delitos cuya pena supone un “gran castigo” (generalmente de muchos años de prisión) para el condenado, es por ello por lo que los miembros del Tribunal del Jurado quizás no estén capacitados para tomar dichas decisiones.

¹¹ SÁNCHEZ, L. (9 de octubre de 2015) “Veinte años del jurado popular, entre su consolidación o su reforma como institución”. *Lawyerpress*.

1.2. Competencia en materia de delitos conexos

Dejando a un lado el tema de la competencia atribuida expresamente al Jurado, se presenta una cuestión problemática en materia de conexión de delitos.

En función del art 17.1 de la Lecrim «los delitos conexos serán investigados y enjuiciados en la misma causa cuando la investigación y la prueba en conjunto de los hechos resulten convenientes para su esclarecimiento y para la determinación de las responsabilidades procedentes salvo que suponga excesiva complejidad o dilación para el proceso».

El 17.2 determina que «son delitos conexos los cometidos por dos o más personas reunidas; por dos o más personas en distintos lugares o tiempos si hubiera precedido concierto para ello; los cometidos como medio para perpetrar otros o facilitar su ejecución; los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos; los delitos de favorecimiento real y personal y el blanqueo de capitales respecto al delito antecedente; y los cometidos por diversas personas cuando se ocasionen lesiones o daños recíprocos».

Sin embargo, el art 5 LO 5/1995 establece que «la competencia del Tribunal del Jurado se extenderá al enjuiciamiento de los delitos conexos, siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los siguientes supuestos: a) Que dos o más personas reunidas cometan simultáneamente los distintos delitos; b) que dos o más personas cometan más de un delito en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto para ello; c) que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad».

Se puede observar que la ley del Tribunal del Jurado no ha acogido todos los supuestos de conexión que se contemplan en la ley de enjuiciamiento criminal.

En ningún caso el Tribunal del Jurado podrá enjuiciar por conexión el delito de prevaricación, así como los delitos conexos cuyo enjuiciamiento pueda efectuarse por separado sin que se rompa la continencia de la causa.

Finalmente, el art 5.3 ley del Tribunal del Jurado establece que «cuando un solo hecho pueda constituir dos o más delitos será competente el Tribunal del Jurado para su enjuiciamiento si alguno de ellos fuera de los atribuidos a su conocimiento. Asimismo, cuando diversas

acciones y omisiones constituyan un delito continuado será competente el Tribunal del Jurado si éste fuere de los atribuidos a su conocimiento».

En esta materia hay que tener también en cuenta el acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el Jurado, que data de 2017. Este acuerdo supone una modificación de la doctrina del TS sobre las competencias del Tribunal del Jurado, de tal forma que se amplía el número de conductas que estos órganos podrán enjuiciar en el caso de acumularse varios delitos conexos. El acuerdo determina que el Jurado conocerá de las causas “que pudieran seguirse por otros delitos cuya competencia no le esté en principio atribuida en los casos en que resulte ineludiblemente impuesta la acumulación pero que sean conexos”¹².

Se puede tomar como ejemplo la sentencia 2744/2017 de 06/07/2017 para entender la relevancia que tiene en la aplicación práctica saber determinar cuándo los delitos conexos son competencia o no del Tribunal del Jurado.

La mencionada sentencia muestra recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por el Ministerio Fiscal, contra auto dictado por la AP Alicante sección VII con sede en Elche, de 03/10/2016. Se trata del enjuiciamiento de delitos de tráfico de influencias y falsedad documental, como se ha visto en apartados anteriores, el tráfico de influencias sí es una de las competencias propias del Tribunal del Jurado tal como establece el art 1.2 LOTJ, por el con la falsedad documental no lo es.

El MF entendía que el delito fin era el delito de falsedad documental, el cual no es competencia del Jurado, y que el delito de tráfico de influencias era un fin para posibilitar la falsedad documental. El MF alegó infracción de precepto constitucional al amparo del art

¹² “El TS modifica su doctrina ampliando los delitos que podrá enjuiciar un jurado según conexidad”, Consejo General de la Abogacía Española, 23 de junio de 2017, <https://www.abogacia.es/2017/06/23/el-ts-modifica-su-doctrina-ampliando-los-delitos-que-podra-enjuiciar-un-jurado-segun-conexidad/>

852 Lecrim¹³, 5.4 LOPJ¹⁴ y 24.1 CE¹⁵. Mostraba pues disconformidad con la interpretación de la Audiencia, a propósito de la cual el delito principal es el de tráfico de influencias y el delito de falsedad documental el conexo.

Esta controversia se suscita a la luz de los acuerdos no jurisdiccionales de 2010, sustituidos en algunos aspectos por el Acuerdo de 09/03/2017, ya citado anteriormente.

Acogiendo la interpretación más apegada al texto de la ley y a la aplicación real actual, se acordaba que, en casos de relación funcional entre dos delitos, es decir, en caso de delitos para perpetrar, facilitar la ejecución o procurar impunidad; si uno de ellos es competencia del Tribunal del Jurado y otro no, conforme al artículo 5.2.c) de la LOTJ se estimará que existe conexión, conociendo el Tribunal del Jurado de los delitos conexos. En este caso, el recurso de casación interpuesto por el MF debe ser desestimado.

2. QUIÉN PUEDE FORMAR PARTE DEL JURADO POPULAR

En primer lugar, hay que acudir a la ley del Jurado para conocer la composición de esta institución, concretamente su art 2 establece que el Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados, más dos suplentes, y un magistrado que lo presidirá.

Partiendo del art 2 simplemente queda claro que estará formado por doce personas, de entre las cuales una de ellas debe ser un magistrado. ¿Y el resto? ¿Quiénes pueden ser esos once jurados designados? La sección segunda del capítulo II LOTJ muestra los requisitos, incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones y excusas de los jurados.

Los requisitos que se enumeran son los siguientes: ser español, mayor de edad, encontrarse en pleno ejercicio de sus derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiera cometido y contar con la aptitud

¹³ Artículo 852 Lecrim: *En todo caso, el recurso de casación podrá interponerse fundándose en la infracción de precepto constitucional.*

¹⁴ Artículo 5.4 LOPJ: *En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional.*

¹⁵ Artículo 24.1 CE: *Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.*

suficiente para el desempeño de la función de Jurado¹⁶. Se trata de unos requisitos básicos ya que la mayor parte de la población los cumple.

El único requisito que puede plantear alguna duda es el último de ellos, es un requisito un tanto abstracto puesto que no se determina cuál es la aptitud suficiente para poder ser Jurado, de hecho, se aclara que no podrá entenderse que las personas con discapacidad no cumplan con este requisito, con lo cual queda abierta la cuestión de quiénes son las personas que no cumplen con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de Jurado. Cuestión que se resuelve atendiendo a las incapacidades¹⁷, incompatibilidades¹⁸ y prohibiciones¹⁹.

En definitiva, de estos artículos de la LOTJ se deduce que los jurados deben ser legos en derecho, pero partiendo de esa premisa, prácticamente “cualquiera” puede ser designado Jurado. Teniendo en cuenta que para poder ser Juez se debe invertir toda una vida estudiando, resulta chocante que Jurado pueda serlo “cualquiera”. Bien es cierto, que no se pueden equiparar ni comparar bajo ningún concepto dichas figuras, pero sí únicamente, desde el punto de vista de que ambas van a decidir sobre cuestiones muy trascendentales en la vida de una persona, en cuanto a la culpabilidad o no de la misma, con la responsabilidad apareja.

Dicha reflexión va en consonancia con la opinión de Juan Antonio Frago (ya mencionado anteriormente), quien alude que «el Jurado surgió en EEUU, donde se colonizaba más rápido de lo que la Administración de Justicia podía expandirse y en ese contexto tiene su lógica. Sin embargo, al igual que nadie confiaría una operación médica a nueve legos, nunca se debería administrar justicia de manera popular. Si hay profesionales que se preparan y viven de ello, es ilógico que se deleguen cuestiones tan complejas y que acarreen normalmente tantos años de prisión a personas de la calle sin ninguna formación»²⁰.

Por el contrario, hay quienes reconocen el Jurado Popular como un derecho – deber necesario en un Estado de Derecho, a través del cual se le otorga “al pueblo” la participación en la administración de la justicia. En este sentido M^a Jesús Díaz Veiga, abogada y profesora

¹⁶ Art 8 LOTJ.

¹⁷ Art 9 LOTJ.

¹⁸ Art 10 LOTJ.

¹⁹ Art 11 LOTJ.

²⁰ SÁNCHEZ, L. (9 de octubre de 2015) “Veinte años del jurado popular, entre su consolidación o su reforma como institución”. *Lawyerpress*.

asociada de derecho procesal en la Universidad Carlos III, declara que en su experiencia como abogada ha podido constatar que los jurados actúan con un alto grado de sentido común, sensatez, capacidad de reflexión y debate²¹.

2.1. Recusación de los candidatos a Jurado

En este caso es la sección cuarta, del capítulo III “Constitución del Tribunal del Jurado” la que establece la forma de la recusación de los candidatos a Jurado.

Los conocidos principios de independencia e imparcialidad con los que debe cumplir el juez predeterminado por la ley son también aplicables al Tribunal del Jurado como tribunal penal. Esto mismo es lo que defendía Tomé García: «el Jurado es una manifestación del derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por la ley, derecho que incluye la independencia judicial (tanto de jueces técnicos como de jueces legos)»²².

Por tanto, para garantizar estos principios se crea la denominada recusación, ofrece a las partes la posibilidad de recusar a aquellos candidatos a Jurado, que entiendan, que no van a poder cumplir con dicha independencia e imparcialidad.

El primer momento recusatorio es el indicado en el art 21 LOTJ, a través del cual se puede recusar a quienes no cumplen con los requisitos establecidos en el art 8 LOTJ, e igualmente a quienes recaen en alguna de las causas de incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones de los artículos 9,10,11 LOTJ respectivamente.

En el art 38.3 LOTJ se dispone que las partes podrán recusar a aquellos en quienes concurra causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibición; y será el Magistrado Presidente quien decida sobre la recusación de los candidatos a Jurado. Esta recusación tiene todo el sentido, puesto que, si concurren candidatos a Jurado que no cumplen con lo establecido por los arts 9, 10, 11 LOTJ, es evidente que no podrá ser miembro del Jurado.

Resulta más problemática la tercera y última posible recusación, la cual procede en el momento de la selección de los jurados y constitución del Tribunal. En este momento tal y

²¹ VEIGA, M. J. (junio 2010) “*La motivación del veredicto, una exigencia irrenunciable*”.

²² GARCÍA, T., *El Tribunal del Jurado: competencia, composición y procedimiento*, Madrid, Edit. Edersa, 1996, p. 61 y 62.

como señala el art 40.3 LOTJ, las partes, tras formular al posible Jurado las preguntas que estimen oportunas (siempre que el Magistrado-presidente las considere pertinentes) podrán recusar sin alegación de motivo determinado hasta cuatro de aquéllos por parte de las acusaciones y otros cuatro por parte de las defensas.

La institución del Jurado persigue que la decisión no esté condicionada, para ello se compone de desconocedores del derecho escogidos “al azar”. Sin embargo, antes de comenzar el juicio oral se realizan preguntas a los posibles candidatos, a través de las cuales las partes pueden conocer el perfil de esa persona, pueden intuir hacia qué lado de la balanza se inclinará si finalmente forma parte del Jurado. Por ello resulta verdaderamente cuestionable el poder recusar a candidatos sin ninguna causa justificada o aparente, ya que, si una de las partes detecta en alguien un perfil que claramente le va a perjudicar a la hora de dictar veredicto, lo más probable es que lo recuse.

Además, actualmente es fácil que las partes puedan acceder a perfiles públicos de los candidatos, a través de las redes sociales, por ejemplo, de tal forma que incluso antes de llegar al momento de la selección de los jurados puedan conocer más acerca de ciertos aspectos como su ideología, opiniones, relaciones, etc. Estos aspectos pueden ser de gran ayuda a las partes a la hora de recusar o no a los posibles jurados.

Por lo tanto, aunque bien es cierto que “la recusación” no permite que las partes construyan un Tribunal del Jurado a su antojo, si les permite “moldearlo”; lo cual desvirtúa en cierto modo el motivo de su creación, que es precisamente, garantizar la independencia e imparcialidad de los jurados.

3. LA MOTIVACIÓN DEL VEREDICTO DEL JURADO POPULAR

En primer lugar, es conveniente conocer qué es el veredicto del Jurado.

A lo largo de la LOTJ se explica en que consiste este veredicto. Comenzando por el art 3 LOTJ que establece cuál es la función de los jurados: «Los jurados emitirán veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable que el Magistrado-Presidente haya determinado como tal, así como aquellos otros hechos que decidan incluir en su veredicto y no impliquen variación sustancial de aquél».

Seguidamente el art 4 LOTJ, al hablar de la función del Magistrado-Presidente, lo menciona nuevamente; estableciendo que este dictará sentencia en la que recogerá el veredicto del Jurado e impondrá la pena o medida que corresponda.

Finalmente, es el capítulo IV de la LOTJ el que dedica su articulado (arts. del 52 al 66) a hablar del veredicto. A lo largo de este articulado, en ningún momento aparece explícita la exigencia de que el veredicto sea motivado. Es en la exposición de motivos bajo el título “El veredicto” en la que si aparece explícitamente mencionada esta exigencia constitucional de que el veredicto del Jurado sea motivado. Es más, establece que dicha exigencia no se satisface con la simple argumentación de la conclusión de culpabilidad o inculpabilidad, sino que también es necesario que dichos argumentos estén correctamente motivados.

En consonancia con lo establecido en la exposición de motivos, el art 61.1.d LOTJ les impone a los componentes del Tribunal del Jurado, la obligación de realizar una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. Dicha explicación, es un reflejo de la exigencia de motivación recogida en la constitución española, y debe quedar reflejada en el acta de la votación.

¿Por qué en la exposición de motivos se dice que la motivación del veredicto del Jurado es una exigencia constitucional? Efectivamente, porque se trata de una exigencia constitucional común a todo tipo de sentencias, recogida en el art 120 CE ²³.

El siguiente fragmento refleja de manera muy clara y concisa el porqué de esta exigencia: «no se pueden admitir como decisiones motivadas y razonadas aquellas que, a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental, se comprueba que parten de premisas inexistentes o patentemente erróneas o siguen un desarrollo argumental que incurre en quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas. Además, existe un deber reforzado de motivación en el caso de las sentencias penales condenatorias, en cuanto título jurídico habilitante de la privación del derecho a la libertad personal»²⁴.

²³ Art 120.3 CE: «Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública».

²⁴ SÁNCHEZ, S. M. (diciembre 2003). *Sinopsis art 120 CE*.

Es también de especial relevancia en este sentido la sentencia 169/2004 de 6 de octubre del TC, es la primera sentencia que trata sobre la exigencia de motivación al veredicto del Jurado. En dicha sentencia llegan a la conclusión de que el deber de motivación de las Sentencias impuesto por el art. 120.3 CE se refiere a todas ellas, lo cual se conecta con el art 61.1.d LOTJ sobre el veredicto del Jurado.

En la sentencia citada se establece textualmente lo siguiente: «La falta de la sucinta explicación a la que se refiere el art. 61.1 d) LOTJ constituye una falta de la exigencia de motivación, proyectada al Jurado, que impone el art. 120.3 CE y supone, en definitiva, la carencia de una de las garantías procesales que, de acuerdo con una consolidada doctrina constitucional, se integran en el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) »²⁵.

En opinión de M^a Jesús Díaz Veiga, abogada y profesora de Derecho Procesal en la Universidad Carlos III, la exigencia de motivación del veredicto es intangible. Justificar una decisión requiere aportar las razones por las que dicha decisión puede entenderse como verdadera o al menos probable. Es necesario pues que además de las conclusiones, se plasme por escrito el modo en el que los jurados han llegado a dichas conclusiones²⁶.

En definitiva, el veredicto del Jurado es el resultado de sus propias deliberaciones, es de suma importancia para la sentencia que dictará el Magistrado – Presidente, ya que en ella recogerá dicho veredicto. Es necesario pues que esté debidamente motivado, en consonancia con lo establecido en el art 61 LOTJ y 120.3 CE; ya que de no ser así se podría incurrir en una violación del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Como ya se ha comentado, el Tribunal del Jurado se ocupa de delitos de especial gravedad y dificultad, y además está formado por desconocedores del derecho, es por ello por lo que deben dejar debidamente constatada su decisión, el porqué de esta y el camino que han seguido para llegar a ella.

No se trata de que expongan argumentaciones jurídicas, puesto que de ello se ocupa el juez al dictar sentencia, sino de unas explicaciones lógicas que muestren con claridad como han llegado al veredicto. Es evidente que a un jurado popular no se le puede exigir la misma

²⁵ Sentencia 169/2004 de 6 de octubre del TC.

²⁶ VEIGA, M. J. (junio 2010). *“La motivación del veredicto, una exigencia irrenunciable”*.

precisión ni motivación en su decisión que se le exigiría a un juez, simplemente se trata de evitar decisiones aleatorias tomadas sin ningún fundamento lógico.

4. RECURSO DE APELACIÓN

El recurso de apelación es un recurso ordinario, a través del cual se entra a conocer de nuevo sobre las pruebas practicadas y la valoración jurídica de las normas aplicadas, hace efectivo el principio de doble instancia. Se interpone ante el mismo órgano que dictó la resolución recurrida, pero resuelve el órgano jurisdiccional superior a este.

En la disposición final segunda de la LOTJ se establecen las modificaciones de la ley de enjuiciamiento criminal que afectan al proceso del Tribunal del Jurado, lo relativo al recurso de apelación, se plasma en el art 846 bis del Libro V de la LECrim denominado «De los recursos de apelación, casación y revisión».

Entre todo el articulado de la ley, es destacable el art 846 bis c) LECrim, en el cual se establecen los motivos en los que puede fundamentarse el recurso de apelación²⁷.

²⁷ Art 846 bis C Lecrim. El recurso de apelación deberá fundamentarse en alguno de los motivos siguientes:

a) Que en el procedimiento o en la sentencia se ha incurrido en quebrantamiento de las normas y garantías procesales, que causare indefensión, si se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación. Esta reclamación no será necesaria si la infracción denunciada implicase la vulneración de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado. A estos efectos podrán alegarse, sin perjuicio de otros: los relacionados en los artículos 850 y 851, entendiéndose las referencias a los Magistrados de los números 5 y 6 de este último como también hechas a los jurados; la existencia de defectos en el veredicto, bien por parcialidad en las instrucciones dadas al Jurado o defecto en la proposición del objeto de aquél, siempre que de ello se derive indefensión, bien por concurrir motivos de los que debieran haber dado lugar a su devolución al Jurado y ésta no hubiera sido ordenada.

b) Que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos o en la determinación de la pena, o de las medidas de seguridad o de la responsabilidad civil.

c) Que se hubiese solicitado la disolución del Jurado por inexistencia de prueba de cargo, y tal petición se hubiere desestimado indebidamente.

d) Que se hubiese acordado la disolución del Jurado y no procediese hacerlo.

e) Que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta.

En los supuestos de las letras a), c) y d), para que pueda admitirse a trámite el recurso, deberá haberse formulado la oportuna protesta al tiempo de producirse la infracción denunciada.

Más allá de las formalidades del procedimiento en la interposición del recurso, lo que interesa en este punto es su aplicación jurídica y las consecuencias de esta. Partiendo de una Sentencia dictada en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón hace un par de años, se puede observar la trascendencia práctica de dicho recurso.

Se trata de una sentencia del TSJ de Aragón, que resuelve recurso de apelación interpuesto por la acusación particular y el Ministerio Fiscal, contra la sentencia de 09 de octubre de 2017 en la causa de Tribunal del Jurado nº 9/2016 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

La sentencia recurrida condenaba al acusado como autor responsable de un delito de homicidio por imprudencia, concurriendo las atenuantes de estar bajo la influencia de alcohol y drogas, miedo insuperable y confesión; a la pena de cuatro años de prisión.

Tanto la acusación particular como el MF aluden varios motivos para interponer el recurso de apelación, pero atendiendo a lo tratado en el apartado anterior (la motivación del veredicto del Jurado), es la falta de motivación del veredicto del Jurado el motivo que resulta de mayor importancia. Dicha falta de motivación supone un quebrantamiento de las normas y garantías procesales y produce una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el art 24 CE. Se trata pues de una vulneración del art 24.1 y 2 CE, en relación con el art 61.1 d) LOTJ. (Art 846 bis C LECrim).

Por un lado, en cuanto a la motivación del veredicto, se resuelve que el Jurado no alcanza el mínimo de motivación exigido, puesto que se limita a enumerar los medios de prueba que le han llevado a considerar probados los hechos recogidos en el objeto del veredicto y se está ante un caso de complejo enjuiciamiento en el que no resulta suficiente dicha enumeración. Hubiese sido necesario que el Jurado expresase que cosas de las escuchadas u observadas y de quién, le sirven como elemento de convicción y por qué, y más, teniendo en cuenta que varios de los medios de prueba, simplemente enumerados, son contradictorios entre sí en todo o parte.

Por otro lado, en cuanto a la motivación de la sentencia, se resuelve que, en este caso, no sirve para completar e integrar el veredicto del Jurado, ya que la motivación contenida en el veredicto es demasiado escasa.

Finalmente, por todo lo aludido, se estima el recurso de apelación en base a la falta de motivación del veredicto. La consecuencia directa de la estimación de dicho recurso es la devolución del asunto a la Audiencia Provincial de Zaragoza para volver a celebrar el juicio ante un nuevo Tribunal del Jurado, en aplicación de lo dispuesto por el art 846 bis f) LECrim. Es precisamente esto lo más destacable del recurso de apelación, la necesidad de celebrar un nuevo juicio. En este nuevo juicio se debe constituir un nuevo Tribunal del Jurado, lo cual comprende nuevos miembros del Jurado popular y por supuesto también nuevo Magistrado – presidente; siempre para mantener la exigencia de imparcialidad objetiva.

En esta Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se observa la importancia de la motivación tanto del veredicto como de la sentencia, ya que la falta de esta puede suponer la nulidad del veredicto y la sentencia, y la devolución de la causa para que se proceda a la celebración de nuevo juicio. A la vez, reluce la importancia del recurso de apelación, ya que es una pieza clave para exigir que se cumpla con la motivación del veredicto.

IV. JURADO POPULAR Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ESPAÑA

1. CONFLICTO ENTRE EL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN (ART 18.1 CE) Y EL DERECHO A LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN (ART 20.1 CE)

1.1. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen (ART 18.1 CE)

El art 18.1 CE establece literalmente que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Este derecho, reconocido en la constitución, se desarrolla a través de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Se trata de un derecho de suma importancia y por ello está recogido en la sección 1ª del capítulo segundo, del título I de la Constitución. Sin embargo, no son pocas las ocasiones en las que este derecho parece pasar a un segundo plano cuando se prima la “necesidad de dar información” en los distintos medios de comunicación.

El derecho al honor debe pues ser mencionado en relación con el Tribunal del Jurado, ya que no hay que olvidar que quienes se enfrentan a estos juicios con Jurado Popular, al igual que el resto de la sociedad, merecen que se respeten sus derechos, entre ellos el derecho al honor, la intimidad y propia imagen.

1.2. Derecho a la libertad de información (ART 20.1 CE)

Por su parte, el art 20.1 CE reconoce los siguientes derechos: a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; a la libertad de cátedra; y a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

Teniendo en cuenta que ambos derechos se encuentran recogidos en la sección 1ª del capítulo segundo, del título I de la Constitución, ambos son derechos fundamentales, es por ello por lo que gozan de especial protección. Pero ¿qué ocurre cuando dichos derechos entran en conflicto? ¿Cuál de estos derechos debe prevalecer?

El art 20.4 CE aporta luz acerca de cómo se resuelve esta cuestión, señalando que «estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia».

Queda claro, por lo tanto, que, en caso de conflicto entre los señalados derechos fundamentales, debe prevalecer el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen. Ahora bien, ¿en qué afecta realmente este conflicto al Tribunal del Jurado?

Pues bien, en la sociedad actual el acceso a la información es realmente sencillo, siguen existiendo los medios tradicionales de comunicación como la radio y la prensa, pero, además, cualquiera puede leer noticias desde los teléfonos móviles, ver la televisión o incluso acceder a redes sociales en las cuales se opina en masa sobre todo tipo de temas.

La justicia es uno de esos temas a cerca de los cuales se debate, se opina y se informa constantemente, en general no supone un problema para quienes “administran justicia a diario”. Siguiendo con esa línea, tampoco debería suponer un problema para los miembros del Tribunal del Jurado, puesto que los jurados deberían saber diferenciar lo que son meras opiniones sin fundamento, de la razón fundada que pueden obtener ellos a lo largo del proceso, sin embargo, en la práctica no resulta tan sencillo.

A continuación, se explica en que consisten precisamente estos juicios paralelos que se realizan al margen de los juzgados, y la influencia que dichos juicios y los medios de comunicación ejercen sobre el Tribunal del Jurado.

2. LOS JUICIOS PARALELOS Y LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL TRIBUNAL DEL JURADO

2.1. El derecho a la presunción de inocencia (ART 24.2 CE)

El derecho a la presunción de inocencia se recoge en el art 24 CE, concretamente en su apartado segundo, el cual establece que todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas

las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La presunción de inocencia se ha convertido en un derecho fundamental de aplicación inmediata y que vincula a todos los poderes públicos, así lo establece la STC 31/1981, lo cual significa «se presume que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario». Esta presunción admite prueba en contrario, de hecho, quien acusa es quien tiene que demostrar la culpabilidad, el acusado no tiene que demostrar su inocencia, ya que se parte de ella.

Siguiendo con lo determinado en la STC 124/2001, «nuestra doctrina está construida sobre la base de que el acusado llega al juicio como inocente y sólo puede salir de él como culpable si su condición es desvirtuada plenamente a partir de las pruebas aportadas por las acusaciones»²⁸.

Jurídicamente se cumple con la presunción de inocencia, ya que ningún juez sea lego o profesional, condenará a alguien como culpable si no hay pruebas que determinen dicha culpabilidad. No es así socialmente, ya que tanto los medios de comunicación, como las redes sociales contribuyen a que se realicen juicios paralelos a través de los cuales “se declara culpable o inocente” al acusado o principal sospechoso de cometer un delito antes incluso de la celebración del juicio, o entre la celebración de este y la sentencia.

Esto no es algo que suceda solo en los juicios celebrados con Jurado popular, sucede a diario en todo tipo de procesos, lo que ocurre es que quien se enfrenta normalmente a esos juicios mediáticos sometidos a “opinión pública” es un Juez (el cual tiene el deber de cumplir con el principio de imparcialidad y cuenta con la experiencia necesaria). Se encuentra pues mayor problema cuando quienes deben enfrentarse a estos juicios paralelos son los jurados que componen el Tribunal del Jurado de un proceso determinado, ya que no están acostumbrados a lidiar con este tipo de situaciones y pueden dejarse llevar por la opinión pública.

Para evitar la influencia de los medios de comunicación, o la relación con terceros que puedan influir en sus decisiones, durante la deliberación del veredicto, los nueve jurados populares

²⁸ Sinopsis realizada por DAVID ORTEGA GUTIÉRREZ, Universidad Rey Juan Carlos. Diciembre 2003.

permanecen incomunicados con el exterior ²⁹. Pero como ya se ha comentado, no se trata de una medida efectiva, no parece que sea suficiente, puesto que antes de llegar al momento de la deliberación, los jurados han podido “contaminarse” con las informaciones de la prensa o los telediarios, en definitiva, ya han podido verse afectados por los juicios paralelos.

Como posible solución, se dictó en marzo de 2016 la directiva 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, a través de la cual se fortalece la garantía procesal objeto de estudio en este apartado, la presunción de inocencia. La finalidad de la citada Directiva consiste en reforzar en el proceso penal el derecho a un juicio justo, estableciendo unas normas mínimas comunes relativas a determinados aspectos de la presunción de inocencia.

La directiva en lo relativo a los medios de comunicación, establece literalmente lo siguiente: «Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que, cuando faciliten información a los medios de comunicación, las autoridades no se refieran a los sospechosos o acusados como culpables mientras no se haya probado con arreglo a la ley la culpabilidad de esas personas. A tal fin, los Estados miembros deben informar a las autoridades de la importancia de tener debidamente en cuenta la presunción de inocencia cuando faciliten o divulguen información a los medios de comunicación. Ello se entiende sin perjuicio del Derecho nacional en materia de protección de la libertad de prensa y otros medios de comunicación».

2.2. Los juicios paralelos

En el apartado anterior se han mencionado los juicios paralelos, pero para aprender a evitarlos, o a evitar, al menos, la influencia que estos tienen sobre las decisiones de los miembros del Jurado popular es relevante saber qué es exactamente lo que conocemos como “juicios paralelos”.

Hace 10 años, Eduardo Espín Templado, lo definía ya como: «el conjunto de informaciones aparecidas a lo largo de un periodo de tiempo en los medios de comunicación, sobre un asunto jurídico a través de los cuales se efectúa por dichos medios una valoración sobre la

²⁹ Artículo 56 ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. «*La deliberación tendrá lugar a puerta cerrada, sin que les sea permitida comunicación con persona alguna hasta que hayan emitido el veredicto, adoptándose por el Magistrado-Presidente las medidas oportunas al efecto.*».

regularidad legal y ética del comportamiento de personas implicadas en hechos sometidos a investigación judicial. Tal valoración se convierte ante la opinión pública en una suerte de proceso. Al cabo de un determinado periodo de tiempo, en el que han ido apareciendo informaciones sobre los hechos acompañados de juicio de valor más o menos explícitos, editoriales, contribuciones de personas ajenas a la plantilla de tales medios, las personas afectadas aparecen ante la opinión pública, o al menos ante un segmento de ellas, como inocentes o culpables»³⁰.

A pesar de que data del año 1999, se corresponde perfectamente con lo que implica un juicio paralelo en la actualidad. Es una definición realmente acertada que refleja, a pesar del paso de los años, lo que suponen los juicios paralelos hoy en día. Lo que venía a decir Eduardo Espín, es básicamente, que los juicios paralelos son valoraciones emitidas por los medios de comunicación, a través de las cuales la sociedad se crea su propia opinión pública y juzga y sentencia (socialmente) a quien se ve inmerso en un proceso judicial, antes de ser juzgado y sentenciado por la justicia.

Se puede comprobar pues que no se trata de un problema de reciente surgimiento, si no que viene de lejos. A lo largo los años, en lugar de haber conseguido una solución a dicho problema, lo que ha ocurrido, es que se ha agravado, debido en gran parte al aumento de las informaciones que proporcionan los medios de comunicación, y la facilidad con la que se puede acceder a ellas.

A lo largo del trabajo se han mencionado tres derechos fundamentales, que son: el derecho al honor, intimidad y propia imagen, así como el derecho a la libertad de información y finalmente el derecho a la presunción de inocencia. Esto es así, porque estos derechos guardan una estrecha relación con los juicios paralelos.

En relación con los jurados populares, los juicios paralelos suponen pues un problema real en la sociedad actual, ya que los miembros del Jurado tienen el deber de mostrar imparcialidad y se les hace realmente difícil. Generalmente se trata de casos que generan en

³⁰ ESPÍN TEMPLADO, E.: Revista Poder Judicial, nº especial XIII, pág123, citado en JUANES PECES, A., Los juicios paralelos, Publicación Actualidad Jurídica Aranzadi núm. 378, Ed. Aranzadi SA, Febrero 1999. p.p. 1-5.

la sociedad una fuerte agitación, o alarma social, debido por ejemplo a la vulnerabilidad de la víctima del delito, como ocurre en el caso de víctimas menores³¹.

Esto supone que los miembros del Jurado lleguen al momento del juicio cargados de información y prejuicios, en ocasiones inclinados hacia una declaración de culpabilidad antes de conocer y analizar todos los detalles reales del caso al que se enfrentan. Cuando esto sucede, la búsqueda de la verdad mediante el proceso, queda y sustituida por lo que transmiten los medios de comunicación.

La consecuencia principal de estos juicios paralelos sobre el Tribunal del Jurado es que desvirtúan el juicio como medio para impartir justicia, y no prestan al proceso la atención que requiere, puesto que ya han predeterminado el resultado de su veredicto en base a la opinión pública y como consecuencia, la sentencia, el resultado del juicio.

A pesar del peso que pueden tener estos juicios paralelos sobre las decisiones tomadas por los tribunales del Jurado, tal como establece Antonio Del Moral, «ningún juez puede imponer una ley que obligue a los medios de comunicación a ser imparciales, ya que estos no están sujetos al mismo principio de imparcialidad al que está sometido un juez (ya sea lego o profesional)»³².

Con lo cual, la solución a este problema no se encuentra en evitar que se creen juicios paralelos, ya que esto iría en contra del principio de publicidad del proceso penal y del derecho a la libertad de información. Si no que, se debe enseñar a los jueces a actuar con imparcialidad total, una vez más, esta cuestión es verdaderamente compleja cuando se trata de jurados legos en derecho.

³¹ Como, por ejemplo, los conocidos como el caso Bretón o el caso Asunta (Se trata de casos muy mediáticos en España, en ambos dos, las víctimas, menores de edad, fueron asesinadas por sus propios padres).

³² Sentencia 277/2015 de 02 de junio del TS.

V. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS TIPOS DE JURADOS EN EUROPA

1. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE JURADOS EN RELACIÓN CON LA INFLUENCIA QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRODUCEN SOBRE ELLOS

1.1. Sistema puro o anglosajón

También conocido como sistema tradicional, es el modelo vigente actualmente en España tal como reconoce la ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. Como bien se ha ido desarrollando a lo largo del trabajo, este tipo de Jurado está compuesto por un grupo de ciudadanos legos en derecho que conocen y se pronuncian acerca de unos hechos hasta llegar a un veredicto de culpabilidad o inocencia.

Bien es cierto, que los ciudadanos legos en derecho que componen el Jurado no actúan a su suerte, si no que cuentan con la ayuda de un Magistrado que guiará y presidirá todo el proceso. Es fundamental, tanto el papel que desempeñan los jueces legos, como el papel que ejerce el Magistrado – Presidente en este tipo de Jurado.

Es el tipo de modelo acogido en España, pero con el matiz de que en España es obligatorio que la resolución del Jurado esté motivada, y que responda a unas preguntas dirigidas por el Magistrado – presidente, es decir, el veredicto no lo deciden los jurados populares por sí mismos ni por sí solos.

Como se ha desarrollado en el apartado cuarto de este presente trabajo, titulado “El Jurado popular y los medios de comunicación en España”, este tipo de Jurado se ve realmente afectado e influenciado por los juicios paralelos que se producen en los medios de comunicación.

El “Jurado puro” está formado en su totalidad por personas legas en derecho, con lo cual, carecen del conocimiento y la experiencia que les permitiría alejarse de los juicios de valor para resolver el procedimiento desde una perspectiva imparcial.

Desde el punto de vista de la influencia que los medios ejercen sobre los miembros de este tipo de Jurado, parece el menos recomendable, por todo lo aludido a lo largo del trabajo, pero presenta unas ventajas únicas en relación con los otros tipos de jurados. Esas ventajas son en

cuanto a la seguridad jurídica y acercamiento de la justicia a los ciudadanos comunes. Ya que la justicia es algo que realmente importa y afecta a todos, parece lógico y necesario que los ciudadanos puedan participar en ella.

Ricardo Yañez Velazco establece que «La judicatura y el mundo jurídico han alentado la idea de la cosa propia y particular donde el hombre de la calle no ha de tener voz, mientras que el Jurado se ve necesario con base en la irremediable corresponsabilidad de los ciudadanos, para mayor confianza y acercamiento a la justicia en contra de la rueda rutinaria de su administración pública, y en pos de la realización y refuerzo efectivo de los principios jurídico-procesales fundamentales, aumentando así la seguridad jurídica»³³.

Aunque este tipo de Jurado es el que más críticas presenta, es también el que responde más fielmente a “la participación de los ciudadanos en la administración de justicia”, ya que, en otros tipos de Jurado, quedan más bien al margen de esa participación directa y se convierten en meros espectadores de lo que sucede a su alrededor, sin poder intervenir verdaderamente en la administración de la justicia.

1.2. Jurado mixto

Como su propio nombre indica, se trata de un modelo de Jurado mixto (compuesto por dos o más cosas distintas mezcladas). Este modelo mezcla algunas características propias del Jurado puro o anglosajón con otras características propias del Jurado escabinado. Actualmente está implantado en Austria y Bélgica.

El procedimiento que se desarrolla frente a este tipo de Jurado posee la estructura del Jurado anglosajón, lo que ocurre es que, en el momento de determinar la sentencia se adopta la estructura del Jurado escabinado.

En relación con el sistema mixto de Jurado o escabinado se advierten las conclusiones mayoritarias de la doctrina científica según las cuales en el sistema mixto los legos son, posiblemente, unos meros cómplices.

³³ YAÑEZ, VELAZCO, R. *La institución del jurado: introducción a su estudio psicosocial*, Madrid, Editorial Reus, 2014, p 153.

1.3. Jurado escabinado

Es el tercer tipo de Tribunal del Jurado con el que se cuenta en Europa, concretamente países como Alemania, Italia y Portugal son los que siguen este modelo. Está compuesto por jueces profesionales y ciudadanos legos en derecho designados por sorteo.

A diferencia del Jurado puro en el cual el Magistrado solo se encarga de dirigir y guiar el proceso, y del Jurado mixto en el cual la figura de los jueces profesionales solo aparece en el momento de determinar el veredicto, en este modelo los jueces profesionales y los legos concurren en todas las etapas controvertidas del procedimiento, adoptando las decisiones por mayoría de sus miembros.

En la mayoría de los países europeos, tras la Segunda Guerra Mundial se ha ido adaptando este sistema, como resultado de la evolución del sistema “puro”, a través de diversas reformas. A través de este sistema se busca dotar de una mayor solidez y confianza a la institución del Jurado, como consecuencia de la desconfianza que genera el Jurado puro o anglosajón, al estar formado únicamente por desconocedores del derecho.

Lo cierto es que en los países en los cuales se ha instaurado este modelo de Jurado, se ha conseguido esa mayor confianza por parte de la sociedad. Pero a la vez se ha perdido la importancia de la participación ciudadana en la administración de la justicia, ya que el hecho de que este modelo esté compuesto por jueces profesionales y jueces legos trae consigo la consecuencia de que los jueces legos se dejan “aconsejar” por los jueces profesionales, al carecer, los primeros, de conocimientos jurídicos.

En cuanto a la influencia de los medios de comunicación, parece que es el tipo de Jurado que mejor consigue combatirla, pero se encuentra una gran desventaja, y es que, realmente el peso de los ciudadanos comunes legos en derecho es mucho menor respecto a otros tipos de jurados, puesto que se dejan influir, ya no solo por los medios de comunicación, sino por los miembros del Jurado que si son conocedores del derecho.

Teniendo en cuenta que precisamente el fin primordial de esta figura es la participación ciudadana en la administración de justicia, ¿qué sentido tiene la existencia de esta figura cuando esta participación ciudadana pasa a un segundo plano? En consonancia con esta

pregunta, hay que destacar la opinión de quienes consideran que el escabinado es un medio de los jueces y las estructuras conservadoras que utilizan para no perder el poder que poseen, en contra de la institución del Jurado³⁴.

³⁴ *Ibíd*em, p. 149.

VI. CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo, se abordan las cuestiones más problemáticas y relevantes a cerca del Tribunal del Jurado en España, una de estas cuestiones es la influencia que los medios de comunicación y los consecuentes juicios paralelos ejercen sobre los miembros del Tribunal del Jurado. Como colofón se introducen los distintos tipos de Jurado en Europa y las ventajas que presentan unos sobre otros.

En cuanto a su concepto, origen, y evolución en España, queda claro que el Tribunal del Jurado es la institución través de la cual los ciudadanos legos en derecho participan en la administración de justicia. Su primera aparición se remonta al siglo XIX, en el Estatuto de Bayona, desde ese momento hasta la ley orgánica 1995 del Tribunal del Jurado (vigente en la actualidad) son numerosas las transformaciones que ha ido sufriendo su regulación. Desde 1995 hasta la actualidad, han transcurrido casi veinticinco años y sin embargo son escasas las modificaciones que ha experimentado, a pesar de las constantes críticas a las que se enfrenta, tanto por parte de quienes desean abolir el Jurado como por parte de quienes desean conservarlo. Hay un punto en el que todos coinciden, el Jurado popular necesita ser adaptado a la realidad social actual, ya que, como es evidente, no es la misma de hace veinte años, necesita ser objeto de una nueva evolución.

¿Qué adaptaciones necesitaría el Tribunal del Jurado para consolidarse como una figura que aporte seguridad jurídica y no sea objeto de influencia por parte de los medios de comunicación? En consonancia con las reflexiones llevadas a cabo a lo largo del trabajo, sería necesario incluir en el texto de la ley del Tribunal del Jurado lo establecido en el acuerdo de 2017 del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo sobre el Jurado, ya que amplía el número de conductas que el Tribunal del Jurado podrá enjuiciar en el caso de acumularse varios delitos conexos.

Por otro lado, sería conveniente reforzar la seguridad jurídica en cuanto al tema de la recusación en el momento de la selección de los jurados, ya que actualmente las partes pueden “eliminar” a posibles miembros del Jurado, de tal forma que no lleguen a serlo, sin alegar motivo alguno. Teóricamente esta previsión normativa es en beneficio de la imparcialidad del Jurado, pero a mi modo de ver, en la práctica lo que las partes buscan es

precisamente lo contrario, eliminar a posibles jurados que podrían “jugar en su contra” y aceptar a aquellos que a su parecer “jugarán a su favor”. Es por ello, que sería más correcto establecer una lista tasada de motivos por los cuales se puede recusar a posibles miembros del Jurado, y no dejarlo al arbitrio de las partes, ya que me parece un tema de suma importancia, pues los miembros del Jurado son quienes van a determinar el veredicto.

En relación con la exigencia de motivación del veredicto y el recurso de apelación como recurso para revertir la falta de motivación, considero que sería recomendable encontrar una solución intermedia, de tal modo que existiese un mecanismo a través del cual el magistrado – presidente tuviese la facultad de señalar al tribunal que el veredicto carece de motivación y se les ofreciese un plazo para poder subsanar dicha falta de motivación. De este modo, no sería necesario interponer recurso de apelación por esta causa y se evitaría la celebración de un nuevo juicio ante un nuevo Tribunal del Jurado, esto tendría consecuencias positivas, ya que, el proceso no se alargaría innecesariamente y, además, el Estado se ahorraría el gasto económico que conlleva la constitución de dos Tribunales del Jurado para tratar una misma causa contra un mismo encausado.

En lo relativo a la influencia de los medios de comunicación, no parece un problema de fácil solución, con la reciente directiva 2016/343 de la Unión Europea, de 9 de marzo de 2016, se pretendía de algún modo disminuir esa influencia, pero realmente no ha cambiado la situación hasta el momento. Con lo cual, la solución no se debe centrar en evitar que se produzcan juicios paralelos, sino en evitar que estos afecten a las decisiones judiciales, ya vengan de jueces legos o de jueces profesionales. ¿Cómo podría evitarse esa influencia en el caso de los jueces legos? Pues bien, sencillamente haciendo que el aislamiento de los miembros del Jurado sea real y efectivo, no solo en el momento del veredicto, sino durante todo el proceso. De esta forma no tendrían acceso a lo comentado por los medios de comunicación hasta que no se hubiese dictado el veredicto.

Finalmente, hay que señalar que se encuentran otros tipos de Jurado en los distintos países de Europa, estos son el Jurado mixto y el escabinado. Hay quienes proponen el Jurado escabinado como solución a los problemas que presenta el Jurado puro en España, para dotarlo de solidez y confianza. En mi opinión no es una solución válida puesto que con este tipo de Jurado se pierde el valor fundamental del Tribunal del Jurado, que es el hecho de que

todos los ciudadanos puedan participar directamente “impartiendo justicia”. Parece más bien una solución para ocultar los problemas y contentar tanto a aquellos que quieren abolir la figura, ya que desde mi punto de vista dotarla de conocedores del derecho es lo mismo que abolirla, y para aquellos que desean mantenerla, ya que se mantiene, pero camuflada.

Bastaría pues con llevar a cabo las modificaciones y adaptaciones mencionadas, sin necesidad de cambiar el modelo de Jurado, para que la institución ganase confianza y seguridad, tanto a nivel jurídico como de cara a la opinión pública (siempre presente). No hay que olvidar que la institución del Jurado Popular no supone la libre administración de justicia por ciudadanos desconocedores del derecho, en ningún caso se trata de dejar decisiones transcendentales en la vida de una persona en manos de nueve hombres o mujeres (once contando con los suplentes) para que dispongan y decidan sobre ella a su antojo. Se trata de que estos nueve miembros del Jurado administren justicia sobre los procesos y las personas determinados por las leyes, y siempre, asistidos y presididos por un magistrado – presidente. Además, este proceso está dotado con las garantías propias de cualquier proceso penal. En última instancia, se puede acudir al recurso de apelación. En definitiva, no se trata de un proceso al margen del derecho, sino todo lo contrario, se trata simplemente de acercar el derecho a todos los ciudadanos del Estado.

~ BIBLIOGRAFÍA ~

LEGISLACIÓN

- Estatuto de Bayona de 6 de julio de 1808
- Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
- Constitución Española de 1978
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
- Ley orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado
- Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Directiva 2016/343 de la Unión Europea, de 9 de marzo de 2016 por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio

SENTENCIAS

- Sentencia 169/2004 de 06 de octubre del Tribunal Constitucional
- Sentencia 9/2018 de 24 de enero del Tribunal Superior de Justicia de Aragón
- Sentencia 277/2015 de 02 de junio del TS

LIBROS

- OSSORIO, M, *Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales*, Heliasta, Buenos Aires, 1974.
- MACHADO, S. M, *Diccionario del español jurídico*, Barcelona, Ed Espasa, 2016.
- BERCEO, M. D, *Apuntes sobre la institución del jurado en España: el jurado en el siglo XXI*, La Rioja, Universidad de la Rioja, 2006.
- CRUCES, E Y AQUESOLO, C, *Los años convulsos 1931 – 1945*, Cádiz, Junta de Andalucía, 2006.

- GARCÍA, T, El Tribunal del Jurado: competencia, composición y procedimiento, Madrid, Edit. Edersa, 1996.
- YAÑEZ, VELAZCO, R. *La institución del jurado: introducción a su estudio psicosocial*, Madrid, Editorial Reus, 2014.

RECURSOS ONLINE

- <http://universojus.com/buscar-definicion/jurado> 05 de marzo de 2019.
- http://www.lawyerpress.com/news/2015_10/0910_15_001.html 05 de marzo de 2019.
- <http://fama2.us.es/fde/ocr/2007/constitucionDe1812Proyecto.pdf> 05 de marzo de 2019.
- <http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=125&tipo=2> 05 de marzo de 2019.
- https://elpais.com/diario/1996/05/28/sociedad/833234424_850215.html 05 de marzo de 2019.
- <https://www.abogacia.es/2017/06/23/el-ts-modifica-su-doctrina-ampliando-los-delitos-que-podra-enjuiciar-un-jurado-segun-conexidad/> 05 de marzo de 2019.
- <https://www.abogacia.es/wp-content/abogados/ficheros/1277109077496.pdf> 05 de marzo de 2019.
- <http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=120&tipo=2> 05 de marzo de 2019.
- <http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=24&tipo=2> 15 de mayo de 2019.
- <https://www.studocu.com/es/document/uned/introduccion-al-derecho-procesal-derecho/apuntes/tema-10-apuntes-10/1243788/view> 15 de mayo de 2019.
- <http://universitas.idhbc.es/n16/16-06.pdf> 15 de mayo de 2019.
- <http://masterabogacia-umh-icae.edu.umh.es/2015/09/15/jurado-escabinado-modelo-para-espana/> 20 de mayo de 2019.